FERNANDO LOPEZ ARIAS, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Veracruz-Llave, a sus habitantes, sabed:

Que en uso de las facultades extraordinarias que me ha conferido la H. Legislatura Local, en Decreto número 62 de fecha 29 de diciembre del año pasado, publicado en la "Gaceta Oficial" de este Gobierno, número 156 de igual fecha, he tenido a bien expedir la siguiente:

LEY NUMERO 5

DE PENSIONES DEL ESTADO DE VERACRUZ

CAPITULO PRIMERO DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1o.- La presente Ley será de aplicación en el territorio del Estado, quedando su cumplimiento a cargo del Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz, como Organismo Público descentralizado con personalidad Jurídica y Patrimonio propios, cuyo domicilio se establece en la ciudad de Xalapa-Enríquez.

Artículo 2o.- Se establecen con el carácter de obligatorias, las siguientes prestaciones:

I.- Jubilación;

II.- Seguro de Vejez;

III.- Seguro por Incapacidad;

IV.- Seguro de Invalidez;

V.- Seguro por Causa de Muerte;

VI.- Gastos de Funeral;

VII.- Indemnización Global;

VIII.- Préstamos a Corto Plazo;

IX.- Préstamos Hipotecarios;

X.- Créditos para la Adquisición en Propiedad de Casa o Terreno para la Construcción de la misma, destinadas a la Habitación Familiar del Trabajador;

XI.- Arrendamiento de Habitaciones Económicas pertenecientes al Instituto;

XII.- Servicios que eleven el nivel de vida del Servidor Público y de su Familia.

Artículo 3o.- El régimen establecido en esta Ley se aplicará:

I.- A los trabajadores al servicio del Gobierno del Estado de Veracruz;

II.- A los trabajadores de los Organismos Públicos que por Ley, por convenio celebrado o por acuerdo del Ejecutivo del Estado sean incorporados a su régimen;

III.- A los trabajadores del Instituto de Pensiones del Estado;

IV.- A los Pensionistas del Gobierno del Estado y Organismos Públicos a que se refieren las fracciones anteriores, y cuyas pensiones sean cubiertas por este Instituto;

V.- A los familiares derechohabientes tanto de los trabajadores como de los pensionistas mencionados;

VI.- Al Gobierno del Estado y Organismos Públicos que se mencionan en este artículo.

Artículo 4o.- Para los efectos de esta Ley, se entiende:

I.- Por Trabajador, a toda persona que preste servicios al Gobierno del Estado o a los Organismos Públicos Incorporados mediante nombramiento legalmente expedido, siempre que sus cargos, sueldos y sobresueldos estén consignados en el presupuesto del Gobierno del Estado y en el de los Organismos mencionados;

II.- Por Pensionista, a toda persona a la que el Instituto esté otorgando cualesquiera de las prestaciones señaladas en las fracciones I a V del artículo 2º de esta Ley;

III.- Por familiares derechohabientes, las personas previstas en el artículo 56 de esta Ley.

Artículo 5o.- Quedan excluidos de los beneficios de esta Ley:

I.- El Gobernador del Estado;

II.- Los Diputados;

III.- (Derogada)

IV.- (Derogada)

V.- Los representantes del Gobierno del Estado en la Capital de la República;

VI.- Los representantes obreros y patronales de las Juntas Especiales de la Central de Conciliación y Arbitraje del Estado;

VII.- Los trabajadores extraordinarios;

VIII.- Los trabajadores que laboren mediante contrato y aquellos que tengan remuneración proporcional al trabajo desempeñado o a los resultados obtenidos;

IX.- Los trabajadores cuya remuneración se cubra conjuntamente con aportaciones del Estado, la Federación, los Municipios u otras Entidades, así como los que laboren en servicios en cooperación salvo el caso de convenios especiales.

El personal comprendido en las tres últimas fracciones, que adquiera la calidad de trabajador que estatuye la fracción I del artículo anterior, tendrá el derecho de que se le reconozca una antigüedad en los términos generales que acuerde el Consejo Directivo del Instituto.

Artículo 6o.- El Gobierno del Estado y los Organismos Públicos Incorporados deberán remitir al Instituto durante el mes de enero de cada año, un ejemplar de su Presupuesto de Egresos respectivo y en caso de que algún organismo no tuviere su presupuesto aprobado en esa fecha, en tanto esté en condiciones de remitirlo deberá enviar provisionalmente una relación de personal con nombramiento sujeto al pago de cuotas a que se refiere el artículo 17 de este ordenamiento.

Asimismo, pondrán en conocimiento del Instituto, dentro de los 15 días siguientes a su fecha:

I.- Las altas y bajas de los trabajadores;

II.- Las modificaciones de los sueldos sujetos a descuentos;

III.- Los nombres de los familiares que los trabajadores deban señalar para disfrutar de los beneficios que esta Ley concede. Esto último dentro de los 15 días siguientes a la fecha de la toma de posesión del trabajador.

En todo tiempo, el Gobierno del Estado y los Organismos Públicos están obligados a proporcionar al Instituto los datos e informaciones que les solicite y requiera, en la forma y términos que crea conveniente, en relación con las funciones que le señala esta Ley.

Los funcionarios y empleados designados por el Gobierno del Estado o por los Organismos Públicos para el cumplimiento de las obligaciones que les impone esta Ley, serán responsables de los daños y perjuicios que ocasionen al Instituto, por omisiones, demoras o incorrección de las informaciones que deben suministrar.

Artículo 7o.- Los trabajadores mencionados en el artículo 3º están obligados a proporcionar al Instituto, al Gobierno del Estado y a los Organismos Públicos Incorporados, a los que presten sus servicios, los datos siguientes:

I.- Los nombres completos de los familiares que tienen derecho a las prestaciones que establece esta Ley;

II.- La documentación e información que sean necesarias para la aplicación de esta Ley.

Los trabajadores tendrán derecho, en su caso, a gestionar que el Instituto los inscriba y a exigir al Gobierno del Estado y Organismos Públicos Incorporados correspondientes, el estricto cumplimiento de las obligaciones que les impone el artículo anterior.

Artículo 8o.- El Instituto expedirá a todos los trabajadores amparados por esta Ley, una tarjeta de identificación, la que les servirá para justificar su personalidad.

Artículo 9o.- Para que el Instituto otorgue a los beneficiarios las prestaciones que les corresponda en los términos de esta Ley, deberán cumplir con los requisitos que la misma o los reglamentos, acuerdos o circulares establezcan.

Artículo 10.- Los trabajadores que por cualquier causa no perciban íntegramente su sueldo, sólo podrán continuar disfrutando de los beneficios que esta Ley les otorga, si pagan la totalidad de las cuotas que les corresponden.

Artículo 11.- El Instituto recopilará y clasificará la información sobre el personal, a efecto de formular escalas de sueldos, promedios de duración de los servicios que esta Ley regula, tablas de mortalidad y, en general, las estadísticas y cálculos necesarios para encauzar las prestaciones establecidas en el artículo 2º, estudiar las futuras, y en su caso, proponer al Ejecutivo, las modificaciones que fueren procedentes.

Artículo 12.- El Instituto formulará el censo general de los trabajadores en servicio y cuidará de registrar las altas y bajas que ocurran, para que dicho censo esté al corriente y sirva de base para formular las liquidaciones que se refieran a las cuotas de los trabajadores y de las aportaciones a cargo del Gobierno del Estado y Organismos Públicos Incorporados.

Artículo 13.- El Gobierno del Estado y Organismos Públicos Incorporados, quedan obligados a remitir sin demora al Instituto, los expedientes y datos que soliciten de los trabajadores o extrabajadores, para las investigaciones correspondientes.

En caso de negativa o demora injustificada para proporcionar dichos expedientes o que los mismos se suministren en forma inexacta o fueren alterados, la autoridad competente exigirá la responsabilidad e impondrá las sanciones respectivas en los términos de esta Ley.

Artículo 14.- Las controversias judiciales que surjan sobre la aplicación de esta Ley, así como todas aquellas en que el Instituto tuviere el carácter del actor o demandado, serán de la competencia de los Tribunales del Estado.

CAPITULO SEGUNDO DE LOS SUELDOS, CUOTAS Y APORTACIONES

Artículo 15.- El sueldo básico que se tomará en cuenta para los efectos de esta Ley, se integrará con el sueldo presupuestal y el sobresueldo, excluyéndose cualquier otra prestación que el trabajador perciba con motivo de su trabajo.

SUELDO PRESUPUESTAL.- Es la remuneración ordinaria señalada en la designación o nombramiento del trabajador en relación con la plaza o cargo que desempeña, con sujeción al Catálogo de Empleos y al Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado u Organismos Públicos Incorporados.

SOBRESUELDOS.- Es la remuneración adicional concedida al trabajador en atención a circunstancias de insalubridad o carestía de la vida del lugar en que preste sus servicios, señalada en el Presupuesto de Egresos correspondiente, con tal denominación, en partida especial, referida a la categoría del trabajo que desempeñe.

El sueldo básico, integrado por las percepciones a que se refieren los párrafos anteriores, estará sujeto a las cotizaciones señaladas en los artículos 17 y 18 de esta Ley, y el mismo se tomará en cuenta para determinar el monto de los seguros, pensiones y préstamos que la misma establece, salvo lo previsto en el artículo 41, en la inteligencia de que el sueldo o sueldos que se tomarán como base para esos efectos, serán aquéllos que perciba el trabajador sin considerar aumentos otorgados en forma particular, sino exclusivamente aquellos incrementos dictados en forma general a servidores de una misma rama o dependencia, o aumentos por ascensos escalafonarios o quinquenios ya preestablecidos.

Artículo 16.- Los recursos necesarios para cubrir el costo de las prestaciones establecidas en esta Ley, y los gastos de administración correspondientes, se obtendrán de las cuotas que están obligados a pagar los trabajadores, el Gobierno del Estado y los Organismos Públicos Incorporados.

Los gastos administrativos a que se refiere el párrafo anterior nunca excederá del 12% del total de las cuotas y aportaciones que se generen en el año fiscal correspondiente.

Artículo 17.- El importe de las cuotas a cargo de los trabajadores a que se refiere el artículo anterior, será el equivalente al 7% del sueldo básico mensual que disfruten.

Los trabajadores que desempeñen dos o más empleos compatibles entre sí entre el Gobierno del Estado y Organismos Públicos Incorporados a que se refiere el artículo 3º de esta Ley, cubrirán sus cuotas sobre la totalidad de los sueldos que tengan asignados.

Artículo 18.- El Gobierno del Estado y los Organismos Públicos Incorporados cubrirán al Instituto como aportaciones, el equivalente al 7% del sueldo mensual de sus trabajadores.

Artículo 19.- El Gobierno del Estado y los Organismos Públicos Incorporados, están obligados a:

I.- Efectuar los descuentos de las cuotas a que se refiere el artículo 17 de esta Ley y los que el Instituto ordene;

II.- Enviar al Instituto las nóminas y recibos en que figuren los descuentos dentro de los 10 días siguientes a la fecha en que deben hacerse;

III.- Expedir los certificados y proporcionar los informes que les soliciten tanto el Instituto como los interesados.

Los pagadores encargados de cubrir sueldos serán responsables en los términos de esta Ley de los actos u omisiones que realicen con perjuicio del Instituto o de los trabajadores, independientemente de la responsabilidad civil, penal o administrativa que proceda.

Artículo 20.- La separación por licencia sin goce de sueldo o suspensión de los efectos del nombramiento a que se refiere el artículo 42 del Estatuto Jurídico de los Trabajadores al Servicio del Estado, se computará como tiempo de servicios, así como en los siguientes casos:

I.- cuando las licencias sean concedidas por un período que no exceda de 6 meses;

II.- Cuando las licencias se concedan para el desempeño de cargos públicos o comisiones sindicales, mientras duren dichos cargos o comisiones;

III.- Cuando el trabajador sufra prisión preventiva seguida de sentencia absolutoria que cause ejecutoria mientras dure la privación de libertad;

IV.- Cuando el trabajador fuere suspendido en los términos de la fracción I del artículo 42 del Estatuto, por todo el tiempo que dure la suspensión y siempre que sea reinstalado en su empleo.

En los casos antes señalados, el trabajador deberá pagar la totalidad de las cuotas a que se refieren los artículos 17 y 18. Si el trabajador falleciere antes de reanudar sus labores y sus familiares derechohabientes tuvieren derecho a pensión, éstos deberán cubrir el importe de esas cuotas, a fin de poder disfrutar de la misma.

Artículo 21.- Cuando un trabajador al servicio del Gobierno del Estado o de los Organismos Públicos Incorporados pase a ocupar un cargo de elección popular, no perderá los beneficios que otorga esta Ley, si continúa aportando al Instituto las cuotas a que se refieren los artículos 17 y 18.

Artículo 22.- Cuando por alguna causa no se hubieren hecho a los trabajadores los descuentos conforme a esta Ley, el Instituto mandará descontar hasta un 50% del sueldo

mientras el adeudo no esté cubierto, a menos que el trabajador solicite y obtenga mayores facilidades para el pago.

Artículo 23.- El Gobierno del Estado y los Organismos Públicos Incorporados, harán entregas quincenales al Instituto, por conducto de sus respectivas Tesorerías o Departamentos correspondientes, del monto de las cantidades resultantes por concepto de las cuotas y aportaciones a que se refieren los artículos 17 y 18. También entregarán quincenalmente el importe de los descuentos que el Instituto ordene que se hagan a los trabajadores por otros adeudos derivados de la aplicación de esta Ley.

CAPITULO TERCERO DE LA JUBILACION Y DE LAS PENSIONES POR VEJEZ, INCAPACIDAD, INVALIDEZ Y MUERTE

SECCION PRIMERA GENERALIDADES

Artículo 24.- El derecho a la jubilación y a las pensiones por vejez, incapacidad, invalidez o muerte, nace cuando el trabajador o sus familiares derechohabientes se encuentren en los supuestos consignados en esta Ley y satisfagan los requisitos que la misma señala.

El Consejo Directivo deberá resolver la solicitud de pensión en un plazo no mayor de 15 días, a partir de la fecha en que quede integrado el expediente.

Artículo 25.- Las cuantías de la jubilación y de las pensiones que se concedan, se computarán a base de cuota diaria.

Artículo 26.- El cómputo de los años de servicio se hará considerando uno solo de los empleos, aun cuando el trabajador hubiese desempeñado simultáneamente varios, cualesquiera que fuese.

En el cómputo de los años de servicio sólo se considerará el tiempo de los prestados al Gobierno del Estado, al Instituto de Pensiones y Organismos Públicos Incorporados.

Artículo 27.- Toda fracción de más de 6 meses en la computación total de servicios, se considerará como año completo.

Artículo 28.- Para el caso de los trabajadores que hayan dejado de prestar servicios al Gobierno del Estado u Organismos Públicos Incorporados, antes de la creación del Instituto y reingresen al servicio activo, tendrán derecho a que se les compute el tiempo de servicios anteriores a su reingreso, después de un mínimo de 3 años de servicios en el nuevo empleo, sin perjuicio de lo establecido en los artículos 40 y 41 de esta Ley.

Artículo 29.- Cuando un trabajador no disfrute de la pensión que le hubiera otorgado el Instituto en los términos previstos por esta Ley, y continúe en servicio activo, podrá renunciar a la prestación concedida, difiriendo el goce de la misma, la que será aumentada en su cuantía de acuerdo con el mayor número de años de servicios y el importe de las cuotas aportadas, durante el tiempo de diferimiento en el goce de la prestación.

Cuando un pensionista reingresare al servicio activo, no podrá renunciar a la pensión que le haya sido concedida para solicitar y obtener otra nueva, salvo el caso de inhabilitados que quedaren aptos para el servicio.

Artículo 30.- Es incompatible la percepción de una pensión otorgada por el Instituto y la percepción de cualquier otra pensión concedida por el propio Instituto y por el Gobierno del Estado y Organismos Públicos a que se refiere el artículo 3º de esta Ley, y que estén incorporados al régimen del mismo. Es igualmente incompatible la percepción de una pensión con el desempeño de cualquier cargo, empleo o comisión remunerados por tales Entidades, siempre que dichos cargos y empleos impliquen la incorporación al régimen de esta Ley. Los interesados podrán gozar nuevamente de la pensión, cuando desaparezca la incompatibilidad.

El infractor a la disposición antes expresada será obligado a reintegrar las cantidades percibidas indebidamente, en el plazo que le será fijado por el Instituto, pero que nunca será menor al tiempo en que las hubiere recibido. Desaparecida la incompatibilidad y reintegradas las cantidades indebidamente recibidas, el pensionista puede volver a disfrutar de la pensión otorgada. Si no hiciese el reintegro en los términos de este artículo, perderá todo derecho a la pensión.

Los pensionistas quedan obligados a dar aviso inmediatamente al Instituto cuando acepten cualquiera de los empleos, cargos o comisiones a que se ha hecho referencia; igualmente, quedan obligados a dar aviso en caso de otorgamiento de alguna otra pensión. En todo caso, el Instituto ordenará la suspensión de la pensión otorgada.

Artículo 31.- La edad y el parentesco de los trabajadores y sus derechohabientes se acreditará ante el Instituto en los términos de la Legislación Civil y la dependencia económica, mediante informaciones testimoniales en vía de Jurisdicción Voluntaria.

Artículo 32.- El Instituto podrá ordenar en cualquier tiempo, la verificación de los documentos y de los hechos que hayan servido de base para conceder una pensión. Cuando se sospechase que son falsos, el Instituto, con audiencia del interesado, procederá a la respectiva revisión y de comprobar la falsedad, ordenará la suspensión del pago de la misma y su cancelación, y denunciará los hechos al Ministerio Público para los efectos que procedan.

Artículo 33.- Para que el Instituto conceda la Jubilación o alguna de las pensiones establecidas por esta Ley, el trabajador o los familiares beneficiarios de éste, deberán cubrir previamente a aquel, las cuotas que estuvieran en mora en la fecha de la solicitud de la prestación. Los adeudos que al transmitirse una pensión a los derechohabientes tuviesen el trabajador o el pensionista, serán cubiertos por aquellos, en los plazos que se convenga con el Instituto con la aprobación del Consejo Directivo.

Artículo 34.- Es nula toda enajenación, cesión o gravamen de las pensiones que esta Ley establece. Devengadas o futuras, serán inembargables y sólo podrán ser afectadas para hacer efectiva la obligación de ministrar alimentos por mandato judicial o para exigir el pago de adeudos con el Instituto, con motivo de la aplicación de esta Ley.

Artículo 35.- Cuando un trabajador tuviera derecho simultáneo a dos o más pensiones de las establecidas en esta Ley, el Instituto le concederá la de mayor cuantía.

SECCION SEGUNDA JUBILACION

Artículo 36.- Tienen derecho a la jubilación los trabajadores con 30 años o más de servicios y que hubiesen contribuido al Instituto regularmente en los términos de esta Ley, a partir del 1º de enero de 1958, cualquiera que sea su edad.

La jubilación dará derecho al pago de una cantidad equivalente al 100% del sueldo presupuestal, salvo lo previsto en el artículo 41 y su percepción comenzará a partir del día siguiente a aquel en que el trabajador hubiese disfrutado el último sueldo por haber causado baja.

SECCION TERCERA PENSION POR VEJEZ

Artículo 37.- Tiene derecho por vejez, los trabajadores que habiendo cumplido 55 años de edad, tuviesen 15 años de servicios y contribución regular al Instituto en los términos de esta Ley, a partir del 1º de enero de 1958.

Artículo 38.- El monto de la pensión por vejez se fijará como sigue:

Cuando el trabajador haya cumplido 55 años de edad, hubiese prestado servicios durante 15 años como mínimo y contribuido al Instituto regularmente en los términos de esta Ley, a partir del 1º de enero de 1958, la pensión se calculará aplicando al sueldo presupuestal, y de acuerdo con los porcentajes de la tabla siguiente:

AÑOS	PORCENTAJE
15	50 %
16	52.5 %

17	55 %
18	57.5 %
19	60 %
20	62.5 %
21	65 %
22	67.5 %
23	70 %
24	72.5 %
25	75 %
26	80 %
27	85 %
28	90 %
29	95 %
30	100 %

Artículo 39.- La pensión total por vejez que se conceda con cargo al Instituto, en ningún caso podrá ser inferior a \$30.00 diarios, para aquellos servidores de tiempo completo que hayan laborado cuando menos 5 horas diarias. A quienes no satisfagan este requisito, la cuantía podrá ser menor pero nunca inferior de \$15.00 pesos diarios.

Artículo 40.- Para calcular el monto de la pensión a que tengan derecho los trabajadores, se tomarán en cuenta exclusivamente el sueldo o sueldos percibidos y, a partir del 1º de enero de 1958, sólo se consideran aquellos sobre los cuales se hubiesen cubierto las aportaciones correspondientes.

Artículo 41.- Para calcular el monto de las cantidades que correspondan por jubilación o por pensión en los términos de los artículos 36 y 38 respectivamente, se tomará como base el sueldo presupuestal a que se refiere el artículo 15, condicionando la inclusión del sobresueldo al citado monto, a la aportación de la cuota correspondiente por un término mínimo de 3 años, contados a partir de la fecha en que entre en vigor la presente Ley.

Artículo 42.- Si el trabajador percibe más de un sueldo, sólo se acumularán cuando correspondan a empleos compatibles desempeñados durante los 5 años inmediatos anteriores a la fecha del acuerdo por el que se conceda, sin perjuicio de lo prevenido en los artículos 20 y 21.

Artículo 43.- El derecho al pago de la pensión por vejez comenzará a partir del día siguiente a aquel en que el trabajador hubiese percibido el último sueldo por haber causado baja.

Artículo 44.- (DEROGADO)

SECCION CUARTA PENSION POR INCAPACIDAD

Artículo 45.- La pensión por incapacidad se otorgará a los trabajadores que se inhabiliten física o mentalmente como consecuencia directa del servicio, sea cual fuere el tiempo que hayan estado en funciones.

En caso de incapacitación a consecuencia directa del servicio, la pensión será igual al sueldo presupuestal que venía disfrutando el trabajador y sobre el cual hubiese cubierto las aportaciones respectivas, salvo lo preceptuado en los artículos 40 y 41.

El Instituto calificará técnicamente la incapacidad de que se trate, ya sea temporal o permanentemente que sufra el trabajador, para los efectos de la vigencia de la pensión, siendo aplicable lo dispuesto en la fracción II del artículo 49 y demás relativos del Capítulo Tercero de esta Ley.

Artículo 46.- El derecho al pago de esta pensión comenzará a partir de la fecha en que el trabajador cause baja motivada por la incapacitación.

Artículo 47.- Cuando fallezca un pensionado por incapacidad permanente, se aplicarán las reglas siguientes:

I.- Si el fallecimiento se produce como consecuencia directa de la incapacidad permanente, los familiares derechohabientes señalados en esta Ley y en el orden que la misma establece, continuarán percibiendo la pensión con cuota íntegra durante el primer año, 10% menos el segundo año e igual deducción en los años sucesivos hasta llegar al 50% de la pensión original;

II.- Si la muerte es originada por causas ajenas a la incapacidad permanente, sólo se entregará a los derechohabientes, como única prestación, el importe de 6 meses de la cuota disfrutada por el pensionista.

SECCION QUINTA PENSION POR INVALIDEZ

Artículo 48.- Se otorgará pensión por invalidez a los trabajadores que se inhabiliten física o mentalmente por causas ajenas al desempeño de su cargo o empleo, si hubiesen contribuido al Instituto regularmente desde el 1º de enero de 1958, y tuviesen por lo menos 15 años de servicio.

El derecho al pago de esta pensión comenzará a partir de la fecha en que el trabajador cause baja motivada por la inhabilitación.

Para calcular el monto de esta pensión, se aplicará la tabla contenida en el artículo 38 en relación con el artículo 41.

Artículo 49.- No se concederá la pensión por invalidez:

I.- Cuando el estado de inhabilitación sea consecuencia de un acto intencional del trabajador, ni cuando sea producida por abuso de bebidas embriagantes o sustancias enervantes u originada por algún delito cometido por el trabajador;

II.- Cuando el estado de invalidez sea anterior al nombramiento del trabajador.

Artículo 50.- El otorgamiento de la pensión por invalidez queda sujeto a la satisfacción de los siguientes requisitos:

I.- Solicitud del trabajador o de sus representantes legales;

II.- Dictamen de uno o más médicos o técnicos designados por el Instituto que certifiquen la existencia del derecho de invalidez. Si el afectado no estuviere de acuerdo con el dictamen del Instituto, el o sus representantes podrán designar médicos particulares para que dictaminen. En caso de desacuerdo entre ambos dictámenes, el Instituto propondrá al afectado una terna preferentemente de especialistas de notorio prestigio profesional para que entre ellos elijan uno, quien dictaminará en forma definitiva, en la inteligencia de que una vez hecha la elección por el afectado, del tercero en discordia, el dictamen de éste será inapelable y por lo tanto obligatorio para el interesado y para el Instituto.

Artículo 51.- Los trabajadores que soliciten pensión por invalidez y los pensionados por la misma causa, están obligados a someterse a los reconocimientos y tratamientos que el Instituto les prescriba y proporcione y, en caso de no hacerlo, no se les tramitará su solicitud o se les suspenderá el goce de la pensión.

Artículo 52.- La pensión por invalidez se suspenderá:

I.- Cuando el pensionista esté desempeñando cargo o empleo en el Estado o en alguno de los Organismos Públicos Incorporados;

II.- En el caso de que el pensionista se niegue injustificadamente a someterse a las investigaciones que en cualquier tiempo ordene el Instituto se practiquen, o se resista a las medidas preventivas o curativas a que deba sujetarse, salvo que se trate de una persona afectada de sus facultades mentales. El pago de la pensión se reanudará a partir de la fecha en que el pensionado se someta al tratamiento médico, sin que haya lugar al reintegro de las prestaciones que dejó de percibir durante el tiempo que duró la suspensión.

Artículo 53.- La pensión por invalidez será revocada cuando el trabajador recupere su capacidad para el servicio; en tal caso el Gobierno del Estado u Organismo Público en que

hubiere prestado sus servicios el trabajador recuperado, tendrá la obligación de restituirlo en su empleo si de nuevo es apto para el mismo, o en caso contrario, asignarle un trabajo que pueda desempeñar, debiendo ser cuando menos de un sueldo y categoría equivalente a los que disfrutaba al acontecer la invalidez. Si el trabajador no aceptare reingresar al otro trabajo remunerado, le será, revocada la pensión.

Si el trabajador no fuese restituido a su empleo o no se le asignara otro en los términos del párrafo anterior por causa imputable al Estado u Organismo Público en que hubiere prestado sus servicios, seguirá percibiendo la pensión, pero ésta será a cargo del Gobierno del Estado u Organismo Público correspondiente.

SECCION SEXTA PENSION POR CAUSA DE MUERTE

Artículo 54.- Cuando un trabajador fallezca a consecuencia directa del cumplimiento del servicio, los derechohabientes señalados en el artículo 56 y en el orden que establece, gozarán por un año de una pensión íntegra, equivalente al 100% del sueldo o sueldos presupuestales que hubiese percibido el trabajador en el momento de ocurrir el fallecimiento, disminuyendo dicha pensión en un 10% en el segundo año y así sucesivamente en los subsecuentes, hasta llegar a la mitad de la pensión original, debiéndose tomar en cuenta lo previsto por el artículo 41 de esta Ley.

Artículo 55.- La muerte del trabajador por causas ajenas al trabajo, cualquiera que sea su edad, con quince años de servicios como mínimo, así como la de un pensionado por vejez, incapacidad o invalidez, darán origen a las pensiones de viudez y de orfandad o pensiones a los ascendientes, en su caso, según lo previene esta Ley. El derecho al pago de esta prestación se iniciará a partir del día siguiente de la muerte de la persona que haya originado la pensión.

Artículo 56.- El orden para gozar de las pensiones a que se refiere este capítulo, será el siguiente:

I.- Esposa supérstite, los hijos menores de 18 años ya sean de matrimonio o fuera de matrimonio, reconocidos o adoptivos;

II.- A falta de esposa legítima, la concubina, siempre que hubiera tenido hijos con ella el trabajador o pensionado, o vivido en su compañía durante 5 años que precedieran a su muerte y ambos hayan estado libres de matrimonio durante el concubinato. Si al morir el trabajador tuviere varias concubinas, ninguna de ellas tendrá derecho a pensión;

III.- El esposo supérstite siempre que a la muerte de la esposa trabajadora o pensionada, fuese mayor de 60 años, en caso de que su edad fuere menor, deberá acreditar que estaba incapacitado para trabajar y que dependía económicamente de ella;

IV.- A falta de cónyuge, hijos o concubina, la pensión por muerte se entregará a los ascendientes en caso de que hubieran dependido económicamente del trabajador o pensionado, durante los 5 años anteriores a su muerte.

La cantidad total a que tenga derecho los deudos, del trabajador o pensionado, se dividirá por partes iguales entre ellos. Cuando fuesen varios los beneficiarios y alguno de ellos perdiese el derecho, la parte que le corresponda será repartida entre los restantes.

Artículo 57.- El monto de estas pensiones será aplicando las siguientes reglas:

I.- Cuando el trabajador fallezca después de 15 años de servicio, la pensión será equivalente, durante el primer año posterior al deceso, a la que hubiese correspondido al trabajador en los términos de los artículos 38, 39, 40 y 41 de esta Ley. Durante los 5 años sucesivos se disminuirá en un 10% hasta reducirla al 50% de la cifra primitiva;

II.- Al fallecer un jubilado o un pensionado por vejez, incapacidad o por invalidez, sus deudos en el orden establecido por esta Ley, continuarán percibiendo pensión como sigue:

a).- El 80% del monto original, durante el primer año;

b).- Del segundo en adelante se irá rebajando un 10% y así sucesivamente hasta llegar a la mitad de la pensión original.

Artículo 58.- Si el hijo del pensionado o trabajador con derecho a pensión, estuviere incapacitado en el momento de ocurrir el fallecimiento de estos últimos, y no pudiere mantenerse por su propio trabajo debido a una enfermedad permanente, defectos físicos o enfermedades psíquicas, tendrá derecho a la pensión por orfandad respectiva, y el pago de la misma se prorrogará por el tiempo que subsista su incapacitación. En tal caso el hijo del pensionado estará obligado a someterse a los reconocimientos y tratamientos que el Instituto prescriba y proporcione y a las investigaciones que en cualquier tiempo éste ordene para los efectos de determinar su estado de invalidez, haciéndose acreedor, en caso contrario a la suspensión de la pensión.

Cuando el hijo de pensionado se encuentre estudiando en planteles Educativos Oficiales, podrá seguir disfrutando de pensión aunque llegue a la mayoría de edad, hasta la conclusión de una carrera Profesional o Especialidad, a condición de que en cada período lectivo demuestre haber obtenido resultados aprobatorios en todas las materias que señale el respectivo plan de estudios.

Artículo 59.- Sólo se pagará la pensión a la viuda o a la concubina mientras no contraiga nupcias o entre en concubinato. Al contraer matrimonio recibirán como única y última prestación, el importe de 6 meses de la pensión que hubiera disfrutado alguna de ellas.

La divorciada no tendrá derecho a la pensión de quien haya sido su cónyuge, a menos que a la muerte del marido éste estuviere pagándole pensión alimenticia por condena judicial y siempre que no existan viuda, hijos, concubina o ascendientes con derecho a la misma.

Cuando la divorciada disfrute de la pensión en los términos de este artículo, perderá dicho derecho si contrae nuevas nupcias, si viviese en concubinato o si no viviese honestamente, previa declaración judicial correspondiente. El importe de la pensión a la divorciada no será mayor de la que hubiese estado disfrutando antes de la muerte del deudor alimentista.

Artículo 60.- Si un pensionista desaparece de su domicilio por más de tres meses sin que se tenga noticias de su paradero, los deudos con derecho a la transmisión de la pensión, disfrutarán de la misma en los términos de la fracción II del artículo 57 con carácter provisional y previa la solicitud respectiva, bastando para ello que se compruebe el estado civil respectivo y la desaparición del pensionista, sin que sea necesario promover diligencias judiciales de declaración de ausencia. Si posteriormente y en cualquier tiempo el pensionista se presentare, tendrá derecho a disfrutar él mismo su pensión y a recibir las diferencias entre el importe original de la misma y aquel que hubiese sido entregado a sus familiares. Cuando se compruebe el fallecimiento del pensionista, la transmisión será definitiva.

CAPITULO CUARTO GASTOS DE FUNERAL

Artículo 61.- Cuando fallezca un trabajador pensionado, el Instituto otorgará a sus deudos o a las personas que se hubiesen hecho cargo de la inhumación, el importe de los gastos realizados hasta por el equivalente de 4 mensualidades de su pensión como ayuda para gastos de funeral, a condición de que éstos no excedan de 6 veces el salario mínimo mensual de la región en que dicho derechohabiente hubiere causado baja del servicio.

Artículo 62.- Independientemente de la Indemnización global que establece el artículo 65, los derechohabientes de un trabajador que falleciera estando en servicio activo, gozarán de una ayuda equivalente a un mes de salario mínimo mensual vigente en la zona donde prestaba sus servicios el trabajador, para gastos de funeral.

Artículo 63.- La ayuda para gastos de funeral a que se refiere el artículo anterior, será cubierta previa presentación del certificado de defunción y la comprobación de los gastos hechos por ese motivo.

Artículo 64.- Si no existiesen parientes o personas que se encarguen de la inhumación de un trabajador o de un pensionista fallecido, el Instituto lo hará limitándose al importe de las cuotas señaladas en este Capítulo.

CAPITULO QUINTO DE LA INDEMNIZACION GLOBAL

Artículo 65.- A los familiares de un trabajador fallecido se les otorgará una indemnización global equivalente a:

I.- El monto total de las cuotas con que hubiere contribuido de acuerdo con el artículo 17, si tuviese de uno a 7 años de servicios;

II.- El monto total de las cuotas que hubiere enterado en los términos del artículo 17, más un 6% de dicho monto, si tuviere de 8 a 14 años de servicios.

Si el trabajador falleciere después de haber laborado 15 años o más de servicios, sin que sus familiares tengan derecho a pensión, el Instituto les entregará el importe de las cuotas a que se refiere el artículo 17 de esta Ley más un 6%.

Artículo 66.- Sólo podrá afectarse la indemnización a que se refiere el artículo anterior, si el trabajador tuviese algún adeudo con el Instituto hasta la fecha de su muerte.

Artículo 67.- El trabajador que se separe del servicio después de haber contribuido cuando menos 15 años al Instituto, tendrá derecho a que se le otorgue pensión en los términos marcados por el artículo 38 de la Ley después de cumplir la edad marcada por el artículo 37. Si falleciere antes de cumplir los 55 años de edad, a sus familiares derechohabientes se les otorgará la pensión de viudez o de orfandad o a los ascendientes en la forma y términos señalados por el artículo 55 y demás relativos.

CAPITULO SEXTO DE LOS PRESTAMOS A CORTO PLAZO

Artículo 68.- Los préstamos a corto plazo, se harán a los trabajadores, conforme a las siguientes reglas:

I.- A quienes hayan cubierto al Instituto las aportaciones a que se refiere el artículo 17, cuando menos por 6 meses;

II.- Mediante garantía a satisfacción del Instituto por el total de la cantidad otorgada en mutuo.

III.- Hasta el importe de 6 meses del sueldo básico del solicitante si sus aportaciones son iguales o mayores al monto del préstamo;

IV.- Los pensionistas gozarán de los beneficios que establece este artículo con sujeción a los acuerdos generales que en los términos y dentro de los lineamientos de esta Ley, dicte el Consejo Directivo.

Artículo 69.- Los préstamos se harán de tal manera que los abonos para reintegrar la cantidad prestada y sus intereses sumados a los descuentos por préstamos hipotecarios y a los que deban hacerse por cualquier otro adeudo a favor del Instituto, no excedan del 50% de los sueldos del interesado, salvo acuerdo del Consejo Directivo.

Artículo 70.- El plazo para el pago del préstamo no será mayor de 18 meses, ni menor que uno.

Artículo 71.- Los préstamos a corto plazo causarán el interés que, mediante acuerdos generales, fije el Consejo Directivo, pero en ningún caso podrán ser mayor del 12% anual, calculados sobre saldos insolutos.

Artículo 72.- El pago de capital e intereses, se hará en abonos quincenales iguales.

Artículo 73.- No se concederá nuevo préstamo mientras permanezca insoluto el anterior. Solamente podrá renovarse cuando haya transcurrido la mitad del plazo por el que fue concedido, cubriéndose los abonos por dicho período y que el deudor pague la prima de renovación que por medio de acuerdos generales fije el Consejo Directivo.

Artículo 74.- Los adeudos por concepto de préstamos a corto plazo, que no fuesen cubiertos por los trabajadores después de un año de su vencimiento, se cargará al Fondo de garantía que se constituirá mediante pago de primas en los términos que fije el Consejo Directivo. Sin embargo, quedará vivo el crédito contra el deudor, pudiendo el Instituto acudir a los medios legales para obtener su pago debiendo abonar a dicho Fondo las cantidades que se recuperen.

CAPITULO SEPTIMO DE LOS PRESTAMOS HIPOTECARIOS

Artículo 75.- Los trabajadores podrán obtener préstamos con garantía hipotecaria en primer lugar sobre inmuebles ubicados en zonas urbanizadas del Estado.

Los préstamos se destinarán a los siguientes fines:

- I.- Adquisición de terrenos en los que deberá construirse la casa-habitación del trabajador;
- II.- Adquisición o construcción de casa-habitación del trabajador;
- III.- Efectuar mejoras o reparaciones de las mismas;

IV.- Redención de gravámenes que soporten tales inmuebles.

Los pensionistas gozarán de los beneficios que establece este artículo, con sujeción a los acuerdos generales que en los términos y dentro de los lineamientos de esta Ley, dicte el Consejo Directivo.

Artículo 76.- Los préstamos Hipotecarios se sujetarán en lo conducente, a las condiciones y facilidades que establece el artículo 82 y se cubrirán mediante amortizaciones quincenales que incluirán capital e intereses.

Artículo 77.- El Instituto formulará tablas para determinar las cantidades máximas que puedan ser prestadas a cada trabajador según su sueldo, tomando como base, que las amortizaciones quincenales no deben sobrepasar del 50% del sueldo o sueldos que el trabajador disfrute y por los cuales se le practiquen descuentos para el Instituto. En los casos en que el trabajador justifique otros ingresos permanentes que puedan computarse para la amortización del préstamo, éste podrá sobrepasar el máximo fijado para su sueldo en forma proporcional. En todo caso, el límite máximo para los créditos hipotecarios, aun tratándose de préstamos mancomunados, será de \$75,000.00.

Artículo 78.- El préstamo no excederá del 75% del valor comercial fijado por el Instituto al inmueble, a menos que el interesado proporcione otras garantías adicionales bastantes para asegurar el excedente.

Cuando el trabajador no estuviere de acuerdo con el avalúo practicado por el Instituto, podrá designar un perito que practique uno nuevo; y en caso de discrepar los peritajes, se podrá nombrar un tercero por ambas partes, y el Consejo Directivo resolverá en definitiva.

Artículo 79.- Los préstamos hipotecarios que se hagan a los trabajadores causarán el interés que fije el Consejo Directivo, pero en ningún caso excederá del 9% anual sobre saldos insolutos.

Artículo 80.- El Instituto constituirá un Fondo especial que tendrá por objeto liquidar los créditos por préstamos hipotecarios o derivados de los contratos a que se refiere el artículo 82 de esta Ley que quedaren insolutos al fallecer el trabajador a quien se hubiere otorgado, de conformidad con el Reglamento que oportunamente expida el Consejo Directivo.

A la muerte del deudor, el Instituto cancelará a favor de los beneficiarios de aquel y con cargo a dicho Fondo, el saldo insoluto.

En ningún caso habrá lugar a la devolución de las aportaciones que se hagan para constituir el Fondo a que se refiere este precepto.

Artículo 81.- Si por haber sido cesado el trabajador o por otras causas graves a juicio del Instituto, no pudiere cubrir los abonos provenientes del préstamo hipotecario o del contrato de venta con garantía hipotecaria o con reserva de dominio, podrá concedérsele, previa solicitud, un plazo de espera de 6 meses, al término de los cuales deberá reanudar sus pagos y el adeudo del lapso de espera lo pagará en el plazo y condiciones que señale el Consejo Directivo.

CAPITULO OCTAVO DE LAS HABITACIONES PARA TRABAJADORES

Artículo 82.- El Instituto adquirirá o construirá casas-habitación para ser vendidas a precios módicos a los trabajadores.

La enajenación de dichas casas podrá hacerse por medio de venta a plazos con garantía hipotecaria o con reserva de dominio, sujetándose a lo previsto respecto de tales modalidades en el Código Civil del Estado y con arreglo a las siguientes bases:

I.- El trabajador podrá entrar en posesión de la casa-habitación una vez firmado el contrato respectivo;

II.- El plazo para cubrir el precio del inmueble, no excederá de 15 años;

III.- Pagándose el capital e intereses, se cancelará la hipoteca y se otorgará la escritura que proceda en el primer caso; y en el segundo caso, se comunicará al Encargado del Registro Público de la Propiedad, para que se haga al margen de la inscripción del Título, la anotación correspondiente, a fin de que se consolide la propiedad de la casa en favor del trabajador;

IV.- Si el trabajador hubiere pagado sus abonos con regularidad durante 5 años o más y se viere imposibilitado de continuar cubriéndolos, tendrá derecho a que el Instituto remate en pública subasta el inmueble y que del producto, una vez pagado el crédito insoluto, se le entregue el remanente;

V.- Si la imposibilidad del pago ocurriere dentro de los primeros 5 años, el inmueble será devuelto al Instituto, rescindido el contrato de venta con garantía hipotecaria o con reserva de dominio, y se cobrará al trabajador el importe de las rentas causada durante el período de ocupación de la finca, así como el importe de los daños o deterioros que por su culpa o negligencia o la de sus familiares o dependientes hubiere sufrido el inmueble, devolviéndosele la diferencia de lo que hubiere abonado a cuenta del precio y el importe de las rentas y la indemnización por daños y deterioros en su caso. Para los efectos de este artículo se fijará desde el otorgamiento de la escritura la renta mensual que se le asigne al inmueble;

VI.- Los honorarios notariales para el otorgamiento de las escrituras serán cubierto por mitad entre el Instituto y los trabajadores; el pago de los impuestos y gastos adicionales serán por cuenta exclusiva de éstos.

Los pensionistas gozarán de los beneficios de este artículo en los términos que dentro de los lineamientos de esta Ley fije el Consejo Directivo por medio de acuerdos generales.

Artículo 83.- El Instituto estará facultado igualmente para adquirir o urbanizar terrenos destinados a formar unidades de habitación y servicios sociales, en favor de los trabajadores, como centros de descanso y vacacionales en lugares apropiados dentro del Estado.

Artículo 84.- Los arrendamientos de casas-habitación a los trabajadores, se regirán por las disposiciones reglamentarias que dicte el Consejo Directivo, las que tendrán por objetivo social en todo caso, el beneficio de los mismos trabajadores.

En el caso de que existieran casas-habitación pertenecientes al Instituto, y los beneficiarios de esta Ley no mostrasen interés en adquirirlas en propiedad o en rentarlas, mediante previo acuerdo del Consejo Directivo, las mismas se podrán enajenar o rentar a terceras personas.

EXENCION DE IMPUESTOS

Artículo 85.- Las casas adquiridas o construidas por los trabajadores para su propia habitación, con créditos hipotecarios otorgados por el Instituto, quedarán exentas durante el plazo en que cubran dichos créditos, de todos los Impuestos Estatales y Municipales. Esta franquicia quedará insubsistente, si los inmuebles fueren enajenados por los trabajadores o destinados a otros fines. Gozarán también de exención de Impuestos Estatales y Municipales los contratos de venta, hipoteca, arrendamiento, préstamo y cualquier otro que celebre el Instituto.

Artículo 86.- Se aplicarán los mismos beneficios a que se refiere al artículo anterior, a los inmuebles adquiridos y contratos celebrados por trabajadores al servicio del Gobierno del Estado u Organismos Públicos Incorporados, con créditos otorgados por Instituciones Privadas, con intervención del Instituto, en las condiciones señaladas por los artículos 75 a 81 de esta Ley, que serán aplicables en lo conducente.

CAPITULO NOVENO DE LAS PRESTACIONES SOCIALES

Artículo 87.- El Instituto en cumplimiento de la fracción XII del artículo 2º, contando con la cooperación y apoyo de los trabajadores, otorgará prestaciones y realizará promociones sociales que mejoren su nivel de vida y de su familia, mediante una formación social adecuada y disponiendo de servicios que satisfagan las necesidades de alimentación, vestido, descanso y esparcimiento.

Artículo 88.- Para los efectos del artículo anterior, el Consejo Directivo aprobará anualmente el programa y presupuesto de actividades para atender las prestaciones y promociones sociales.

Artículo 89.- El Instituto elaborará el Reglamento y señalará la organización administrativa que atienda y proporcione los servicios sociales que se establezcan.

Artículo 90.- La formación social de los trabajadores y de sus familiares derechohabientes, se realizará mediante el establecimiento de Centros Vacacionales y de Descanso.

Artículo 91.- Para facilitar a los trabajadores, pensionistas y familiares derechohabientes la adquisición a precios económicos de alimentos, ropa y artículos para el hogar, señalados en un cuadro básico que establezca el Reglamento respectivo, el Instituto promoverá el establecimiento de almacenes y tiendas.

Artículo 92.- Para la elaboración de los programas y ejecución de las promociones tendientes a elevar el nivel de vida de los trabajadores, el Instituto deberá realizar los estudios y practicar las investigaciones necesarias, a fin de determinar las condiciones económicas y sociales de los trabajadores y de sus familiares derechohabientes.

CAPITULO DECIMO DE LA PRESCRIPCION

Artículo 93.- El derecho a la jubilación y a la pensión es imprescriptible. Las pensiones caídas, las indemnizaciones globales y cualquiera prestación en dinero a cargo del Instituto que no se reclame dentro de los 3 años siguientes a la fecha en que hubieren sido exigibles, prescribirán en favor del Instituto.

Artículo 94.- Los créditos respecto de los cuales el Instituto tenga el carácter de acreedor, cualquiera que sea su especie, prescribirán en diez años, a contar de la fecha en que el propio Instituto pueda, conforme a la Ley, ejercitar sus derechos.

Artículo 95.- Las obligaciones que en favor del Instituto señala la presente Ley a cargo del Gobierno del Estado y Organismos Públicos Incorporados, prescribirán en el plazo de 10 años contados a partir de la fecha en que sean exigibles.

La Prescripción se interrumpirá por cualquier gestión de cobro, hecha por escrito, judicial o extrajudicial.

CAPITULO DECIMOPRIMERO
DE LAS FUNCIONES Y ORGANIZACION DEL INSTITUTO
SECCION PRIMERA

Artículo 96.- El Instituto, con el carácter que le asigna el artículo 1º de esta Ley, podrá celebrar toda clase de actos y contratos, así como defender sus derechos ante los Tribunales y fuera de ellos y ejercitar las gestiones judiciales o extrajudiciales que le competan. El Instituto deberá obtener la autorización previa del Gobernador del Estado y del Consejo Directivo, para desistirse de las acciones intentadas o de los recursos interpuestos, así como para dejar de interponer los que las Leyes le concedan cuando se trate de asuntos que afecten su patrimonio.

Artículo 97.- El Instituto de Pensiones del Estado tendrá las siguientes funciones:

- I.- Otorgar y administrar los diversos servicios a su cargo;
- II.- Vigilar la concentración de las cuotas, aportaciones y demás ingresos del Instituto;
- III.- Satisfacer las prestaciones a su cargo;
- IV.- Otorgar jubilaciones y pensiones;
- V.- Invertir los Fondos de acuerdo con las disposiciones de esta Ley;
- VI.- Realizar toda clase de actos jurídicos, aun los de naturaleza mercantil, que tengan por objeto, la operación de empresas industriales o comerciales, previo acuerdo del Consejo Directivo;
- VII.- Adquirir bienes muebles e inmuebles necesarios para la realización de sus fines;
- VIII.- Organizar sus Dependencias y fijar la estructura y funcionamiento de las mismas;
- IX.- Expedir los reglamentos para la debida prestación de sus servicios y de su organización interna;
- X.- Las demás que le confieran esta Ley y sus reglamentos.

SECCION SEGUNDA
ORGANIZACION DEL INSTITUTO

Artículo 98.- Los órganos de gobierno del Instituto serán:

- I.- El Consejo Directivo, y
- II.- La Dirección.

El Consejo Directivo es la Autoridad suprema del Instituto.

Artículo 99.- El Consejo Directivo se compondrá de 7 miembros, el primero será designado directamente por el Gobernador del Estado con el cargo expreso de Director del Instituto; 3 más nombrados por el propio Gobernador y otros 3 por los trabajadores, de los cuales la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado y Municipios designará uno y los 2 restantes serán nombrados por los organismos sindicales del Magisterio que de acuerdo con sus padrones agrupen el mayor número de personas derechohabientes del Instituto. El Director fungirá como Presidente del Consejo.

Artículo 100.- Los miembros del Consejo Directivo no podrán ser al mismo tiempo empleados o funcionarios del Instituto, salvo el Director.

Artículo 101.- Los miembros del Consejo Directivo durarán en sus funciones mientras sus nombramientos no sean revocados libremente por quienes los hayan designado.

Artículo 102.- Por cada miembro propietario del Consejo Directivo, excepción hecha del Director General, se nombrará un suplente, el cual lo substituirá en sus faltas temporales que no excedan de 6 meses.

Artículo 103.- Para ser miembro del Consejo Directivo se requiere:

I.- Ser ciudadano mexicano por nacimiento y en pleno ejercicio de sus derechos;

II.- (DEROGADA).

II.- Ser de reconocida competencia y honorabilidad.

Artículo 104.- Los miembros del Consejo Directivo percibirán por cada sesión a la que asistan, los honorarios que señale el Consejo Directivo. Los suplentes no percibirán remuneración mientras no entren en funciones.

Artículo 105.- Corresponde al Consejo Directivo:

I.- Planear las operaciones y servicios del Instituto;

II.- Decidir las inversiones del Instituto;

III.- Dictar los acuerdos que resulten necesarios para satisfacer los reglamentos establecidos en esta Ley;

IV.- Conceder, negar, suspender, modificar y revocar las jubilaciones y pensiones, en los términos de esta Ley;

V.- Aprobar y poner en vigor los reglamentos interiores del propio Instituto;

VI.- Establecer Delegaciones o Agencias del Instituto que fueren necesarias en otras poblaciones del Estado;

VII.- Conferir poderes generales o especiales, de acuerdo con el Director;

VIII.- Examinar para su aprobación o modificación los balances anuales, los Presupuestos de Ingresos y Egresos y el Plan de Labores del Instituto;

IX.- Otorgar gratificaciones y recompensas a los funcionarios y empleados del Instituto;

X.- Conceder licencias a los Consejeros;

XI.- Proponer al Ejecutivo del Estado los proyectos de reforma a esta Ley;

XII.- En general, realizar todos aquellos actos y operaciones autorizadas por esta Ley y los que fuesen necesarios para la mejor administración o gobierno del Instituto y prestación de sus servicios.

Artículo 106.- El Consejo Directivo celebrará las sesiones que sean necesarias para la debida marcha del Instituto. Las sesiones serán válidas con la asistencia cuando menos de cuatro Consejeros, 3 de los cuales deberán ser representantes del Estado.

Artículo 107.- Los acuerdos del Consejo Directivo se tomarán por mayoría de votos de los miembros presentes. En caso de empate, el Presidente o quien haga sus veces, tendrá voto de calidad.

Artículo 108.- A falta del Presidente del Consejo, las sesiones serán dirigidas por uno de los representantes del Estado que se elija por los presentes.

Artículo 109.- Los acuerdos del Consejo Directivo que afecten intereses particulares, podrán recurrirse ante el mismo dentro de los 15 días siguientes, para que sean discutidos nuevamente y, en su caso, ratificados o modificados.

Artículo 110.- El Director del Instituto tendrá las obligaciones y facultades siguientes:

I.- Representar al Instituto, al Consejo Directivo y ejecutar los acuerdos de éste;

II.- Presentar cada año al Consejo, informe pormenorizado del estado del Instituto;

III.- Someter a la decisión del Consejo, todas aquellas cuestiones que sean de la competencia del mismo;

IV.- Firmar las escrituras públicas y títulos de crédito en que el Instituto intervenga. Esta facultad podrá delegarse mediante acuerdo expreso del Consejo Directivo;

V.- Representar al Instituto en toda cuestión Judicial, extrajudicial y administrativa, estando facultado para designar apoderados;

VI.- Resolver bajo su inmediata y directa responsabilidad, los asuntos urgentes de la competencia del Consejo, a reserva de dar cuenta al mismo a la brevedad posible;

VII.- Formular y presentar para discusión y aprobación del Consejo, el Balance, el Presupuesto de Ingresos y Egresos y el Plan de Labores del Instituto, correspondientes a cada ejercicio anual;

VIII.- Llevar la firma del Instituto sin perjuicio de la delegación de facultades que para tal efecto fueren necesarios;

IX.- Formular el calendario oficial del Instituto y autorizar en casos extraordinarios la suspensión de labores;

X.- Nombrar y remover al personal del Instituto;

XI.- Conceder Licencias al personal en los términos de las leyes correspondientes;

XII.- Vigilar las labores del personal, exigiendo su debido cumplimiento, e imponer a los trabajadores del Instituto las correcciones disciplinarias procedentes;

XIII.- Someter a la consideración del Consejo las reformas o adiciones que considere pertinentes a los reglamentos interiores del Instituto;

XIV.- Convocar a sesiones ordinarias y extraordinarias a los miembros del Consejo Directivo cuando proceda o a su juicio existan razones suficientes;

XV.- Todas las demás que le fijen los reglamentos o le otorgue en el Consejo Directivo.

Artículo 111.- Cuando el Director falte temporalmente al desempeño de sus funciones, el Gobernador del Estado determinará la persona que lo substituya cuando el caso lo amerite.

Artículo 112.- El director General podrá ser auxiliado en sus funciones por un Subdirector que nombre el Gobernador del Estado, en caso necesario, quien deberá reunir los requisitos exigidos por el artículo 103 de esta Ley.

Artículo 113.- Los funcionarios y el personal del Instituto serán pagados con cargo al Presupuesto de éste y percibirán la retribución que en el mismo señale

Artículo 114.- Las relaciones de trabajo entre el propio Instituto y su personal se regirán por el Estatuto Jurídico de los Trabajadores al Servicio del Estado.

CAPITULO DECIMOSEGUNDO DEL PATRIMONIO E INVERSIONES DEL INSTITUTO

SECCION PRIMERA PATRIMONIO DEL INSTITUTO

Artículo 115.- El Patrimonio del Instituto lo constituirán:

I.- Las propiedades, posesiones, derechos y obligaciones que al entrar en vigor esta Ley integren el Patrimonio del Instituto de Pensiones de Retiro;

II.- Las aportaciones de los trabajadores en los términos de esta Ley;

III.- Las aportaciones que hagan el Gobierno del Estado y Organismos Públicos Incorporados en los términos de esta Ley;

IV.- El importe de los créditos e intereses a favor del Instituto y a cargo de los trabajadores y del Gobierno del Estado y Organismos Públicos Incorporados;

V.- Los intereses, rentas, plusvalías y demás utilidades que se obtengan de las inversiones que conforme a esta Ley haga el Instituto;

VI.- El importe de las indemnizaciones, pensiones caídas e intereses que prescriben en favor del Instituto;

VII.- El producto de las sanciones pecuniarias derivadas de la aplicación de esta Ley;

VIII.- Las donaciones, herencias y legados que se hicieren a favor del Instituto;

IX.- Los muebles e inmuebles que el Gobierno del Estado y Organismos Públicos Incorporados destinen y entreguen para el servicio público que establece la presente Ley;

X.- Cualquier otra percepción respecto de la cual el Instituto resultare beneficiario.

Artículo 116.- Los trabajadores contribuyentes no adquieren derecho alguno ni individual ni colectivo al patrimonio del Instituto, sino sólo a disfrutar de los servicios que esta Ley concede.

Artículo 117.- Los bienes muebles e inmuebles pertenecientes al Instituto, gozarán de las franquicias, prerrogativas y privilegios concedidos a los fondos y bienes del Gobierno del

Estado. Dichos bienes así como los actos y contratos que celebre el Instituto estarán igualmente exentos de toda clase de impuestos y derechos.

El Instituto se considerará de acreditada solvencia y no estará obligado a constituir depósitos ni fianzas legales.

Artículo 118.- Si llegare a ocurrir en cualquier tiempo que los recursos del Instituto no basten para cumplir con las obligaciones a su cargo, establecidas por esta Ley, el déficit será cubierto por el Gobierno del Estado y Organismos Públicos Incorporados a que se refiere el artículo 3º en la proporción que a cada uno corresponda, previa la celebración de convenios especiales.

SECCION SEGUNDA INVERSIONES

Artículo 119.- La inversión de las reservas del Instituto deberá hacerse en las mejores condiciones de seguridad, rendimiento y liquidez, prefiriéndose en igualdad de circunstancias las que, además, garanticen mayor utilidad para los derechohabientes del Instituto.

Artículo 120.- Las reservas se invertirán:

- I.- En préstamos a corto plazo, sujetos a las condiciones señaladas en esta Ley;
- II.- En préstamos hipotecarios que se regirán por las disposiciones respectivas de esta Ley;
- III.- En la adquisición y urbanización de terrenos para formar colonias de trabajadores;
- IV.- En la construcción de casas-habitación para enajenarlas a los trabajadores y pensionistas conforme a las disposiciones asignadas en esta Ley;
- V.- En la adquisición o construcción de centros de descanso y vacacionales, incluyendo el equipo y mobiliario adecuados, para que los disfruten los trabajadores y pensionistas mediante la fijación de cuotas mínimas;
- VI.- En bonos o títulos emitidos por el Gobierno Federal y del Estado, Instituciones Nacionales de Crédito o Entidades encargadas del manejo de servicios públicos, siempre que se sujeten a lo dispuesto en el artículo siguiente;
- VII.- Aquéllas que autorice el Consejo Directivo con el aval del Gobierno del Estado.

Artículo 121.- Los bonos o títulos a que se refiere la fracción VI, del artículo anterior, deberán estar garantizados por la afectación en fideicomiso de alguna contribución suficiente para el servicio de sus intereses y amortización, o por participaciones en impuestos federales. En los

emitidos por el Gobierno Federal, del Estado o por Instituciones Nacionales de Crédito, bastará con que se encuentren al corriente de sus servicios.

Artículo 122.- Todo acto, contrato o documento que implique obligación o derecho inmediato o eventual para el Instituto, deberá ser registrado en su contabilidad.

La contabilidad del Instituto mostrará por separado la situación de los servicios a que se refiere el artículo 2º, en el orden en que se encuentren enumeradas las diversas prestaciones que se otorguen a los beneficiarios de esta Ley.

Artículo 123.- El Gobierno del Estado tendrá en todo tiempo la facultad de supervisar, por medio de su Tesorería General, las cuentas del Instituto, y la administración de su patrimonio, a fin de poder precisar con la mayor exactitud posible la situación financiera del Instituto.

CAPITULO DECIMOTERCERO DE LAS RESPONSABILIDADES SANCIONES

Artículo 124.- Los funcionarios y trabajadores del Gobierno del Estado y Organismos Públicos Incorporados, que dejen de cumplir con alguna de las obligaciones que les impone esta Ley, serán sancionados con multa de 50 a 5 mil pesos según la gravedad del caso.

Artículo 125.- Los pagadores y encargados de cubrir sueldos que no efectúen los descuentos que procedan en los términos de esta Ley, serán sancionados con una multa equivalente al 5% de las cantidades no descontadas, independientemente de la responsabilidad civil o penal en que incurran, sin perjuicio de regularizar la situación de los trabajos en los términos del artículo 22.

Artículo 125 BIS.- En caso de mora en la entrega de las cuotas, aportaciones y descuentos señalados en el artículo 23, el Gobierno del Estado u Organismos Públicos Incorporados cubrirán a partir de la fecha en que los créditos se hicieren exigibles, el 2% mensual de recargos sobre las cantidades insolutas, incurriendo además en las sanciones que prescribe esta Ley. Los recargos a que se refiere el párrafo anterior no excederán del importe del crédito de que se trate.

El Instituto podrá conceder prórroga para el pago de las cantidades de que se trate en caso necesario y previa autorización del Consejo Directivo. Durante los plazos concedidos se causarán recargos del 1% mensual sobre saldos insolutos.

Artículo 126.- Las sanciones pecuniarias previstas en los artículos anteriores, a que se hicieren acreedores los trabajadores o funcionarios al servicio del Instituto, serán impuestas por el Director General, después de oír al interesado y son revisables por el Consejo

Directivo, si se hace valer la inconformidad por escrito, dentro del plazo de 15 días. Las mismas sanciones, cuando se trate de los funcionarios o trabajadores que no presten servicios al Instituto, se impondrán por la Tesorería General del Estado o la Dependencia que corresponda, con vista de la documentación que envíe el Director General del Instituto y previa audiencia del afectado.

Artículo 127.- Los miembros del Consejo Directivo, el Director, los funcionarios y trabajadores del Instituto, como encargados de un servicio público, estarán sujetos a las responsabilidades civiles y penales en que pudieren incurrir.

Artículo 128.- Se reputará como fraude y se sancionará como tal, en los términos del Código Penal del Estado, el obtener las prestaciones que esta Ley concede a los trabajadores del Gobierno del Estado y Organismos Públicos Incorporados, sin tener el carácter de beneficiarios de los mismos o derecho a ellas, mediante cualquier engaño, ya sea en virtud de simulación, sustitución de personas o cualquier otro acto.

Artículo 129.- Cuando se establezca la responsabilidad pecuniaria a cargo del trabajador y a favor del Instituto por la imposición de las sanciones establecidas en este capítulo o por haber recibido servicios indebidamente, el Gobierno del Estado u Organismos Públicos Incorporados de quien dependa el trabajador, le hará a petición del Instituto, los descuentos correspondientes hasta por el importe de su responsabilidad, con la limitación establecida en el artículo 22 de esta Ley.

Artículo 130.- El Instituto tomará las medidas pertinentes en contra de quienes indebidamente aprovechen o hagan uso de los derechos o beneficios establecidos por esta Ley, y, ejercitará ante los tribunales competentes las acciones que correspondan, presentará las denuncias, formulará las querellas y realizará todos los actos y gestiones que legalmente procedan, así como contra cualesquiera que cause daño o perjuicio a su patrimonio o traten de realizar cualesquiera de los actos anteriormente enunciados.

Artículo 130 BIS.- Independientemente de lo establecido en esta Ley, cuando un trabajador se separe del servicio dejando un adeudo con el Instituto, se aplicará a cuenta del mismo el importe de las cuotas que hubiere aportado, cobrándose el remanente -Si lo hubiere- al fiador, en la inteligencia de que en este caso el deudor perderá definitivamente la antigüedad de que hubiese computado hasta esa fecha.

CAPITULO DECIMOCUARTO DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

Artículo 131.- Se instituye la pensión móvil para los pensionados de acuerdo con las siguientes características:

I.- La movilidad consistirá en dar un aumento a los pensionados en la misma fecha en que el Gobierno del Estado y los Organismos Públicos Incorporados otorguen incremento salarial a los trabajadores en servicio activo.

II.- El aumento a que se refiere la fracción anterior, será equivalente al porcentaje real de incremento que reciban los trabajadores en servicio activo, de acuerdo al estudio actuarial a que se refiere el artículo 133 de esta Ley.

III.- La movilidad empezará a partir del tercer año en que el derechohabiente haya entrado en estado de pensionista.

El Consejo Directivo del Instituto dictará un Reglamento en el que se determine el procedimiento para la aplicación de la movilidad de las pensiones.

Los pensionados recibirán anualmente un aguinaldo que si el estudio actuarial marcado en el artículo 133 de esta Ley determina que es posible, será igual en número de días al que de manera general perciban los trabajadores en activo, pero nunca inferior al otorgado en el año anterior.

Artículo 132.- En ningún caso y por Autoridad alguna, se podrá disponer de los Fondos del Instituto, aun a título de préstamo reintegrable.

Artículo 132 BIS.- Los gastos de Administración de las empresas patrimoniales de las Instituciones creadas de acuerdo con la fracción VI del artículo 97, se absorberán en los ingresos de éstas, obteniéndose a la vez una rentabilidad adecuada al capital invertido y en caso de no ser así se les liquidará previo acuerdo del Consejo Directivo.

Artículo 133.- Se realizará un estudio actuarial por lo menos cada 2 años, por profesionales en la materia, para conocer la reserva técnica de la Institución con la finalidad de determinar el porcentaje de aumento a las pensiones y ver las posibilidades de conceder las prestaciones marcadas en las fracciones IX a la XII del artículo 2º de esta Ley.

Artículo 134.- En relación con las operaciones a que se refieren las fracciones III, IV y V del artículo 120 de esta Ley, el Instituto deberá crear las reservas de seguridad necesarias, que permitan programar convenientemente la adquisición, urbanización y en su caso construcción, de bienes inmuebles propios para los fines del Instituto. El mismo perito que realice los cálculos a que se refiere el artículo anterior, podrá determinar las reservas de seguridad que se mencionan líneas arriba.

Artículo 135.- Cuando no sea posible atender todas las solicitudes que se presenten para las operaciones comprendidas en el artículo 120 se considerará preferentemente, en igualdad de condiciones, el mayor tiempo que tengan de servicios los solicitantes, que éstos carezcan de bienes especialmente raíces, y que se hayan distinguido por su moralidad, dedicación y competencia en el desempeño de sus cargos.

Artículo 136.- Independientemente de las atribuciones del Consejo Directivo, el Ejecutivo del Estado queda facultado para vigilar el cumplimiento de esta Ley, así como para interpretarla administrativamente, por medio de disposiciones generales que deberán publicarse en la "Gaceta Oficial" del Gobierno del Estado.

Artículo 137.- Las publicaciones en la "Gaceta Oficial", ordenadas por el Instituto en cumplimiento de sus funciones, no causarán Derechos Fiscales.

Artículo 138.- Los pensionistas del Gobierno del Estado u Organismos Públicos que al entrar en vigor esta Ley estén sometidos a un régimen especial de pensiones con arreglo a disposiciones anteriores, seguirán sujetos al mismo entre tanto se hacen los ajustes que procedan para que puedan incorporarse a las normas de esta Ley.

Artículo 139.- Los Organismos Públicos que se hubieren incorporado anteriormente al Instituto, y los que se incorporen a partir de la vigencia de esta Ley, quedan sujetos permanentemente al régimen que la misma establece.

TRANSITORIOS

Artículo 1o.- Esta Ley entrará en vigor 3 días después de su publicación en la "Gaceta Oficial" del Estado.

Artículo 2o.- Las pensiones concedidas con anterioridad por el Instituto de Pensiones de Retiro, seguirán cubriéndose de conformidad con las disposiciones fijadas por la Ley correspondiente. La transmisión de tales pensiones se hará en lo sucesivo, a los beneficiarios, en los términos que señale esta Ley.

Artículo 3o.- Las solicitudes que al entrar en vigor esta Ley, se encuentren en trámite, se sujetarán a los términos de la misma.

Artículo 4o.- El personal del Instituto de Pensiones del Estado, se formará con los trabajadores que estaban adscritos al Instituto de Pensiones de Retiro y los de nuevo ingreso. Los miembros actuales del Consejo Directivo y el Director en funciones, continuarán en sus puestos mientras no les sea revocada su designación.

Artículo 5o.- Las pensiones concedidas con anterioridad a esta Ley y que se encuentren vigentes, quedarán modificadas a partir del día en que entre en vigor, en la forma siguiente:

Menores de \$ 300.00 se ajustarán a \$600.00 mensuales

de \$ 300.01 a \$ 350.00 se aumentarán \$ 300.00
de \$ 350.01 a \$ 400.00 se aumentarán \$ 250.00
de \$ 400.01 a \$ 450.00 se aumentarán \$ 200.00
de \$ 450.01 a \$ 500.00 se aumentarán \$ 150.00
de \$ 500.01 a \$ 600.00 se aumentarán \$ 100.00
de \$ 600.01 a \$ 700.00 se aumentarán \$ 75.00
de \$ 700.01 a \$ 800.00 se aumentarán \$ 65.00
de \$ 800.01 a \$ 900.00 se aumentarán \$ 55.00
de \$ 900.01 a \$ 1,000.00 se aumentará \$ 45.00

Artículo 6o.- Quedan abrogadas la Ley de Pensiones de Retiro de 2 de enero de 1958, sus adiciones y reformas, contenidas en Leyes números 1 y 31, de fecha 2 de enero de 1961 y 11 de septiembre de 1962, respectivamente.

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento.

DADA en la residencia del Poder Ejecutivo, en la ciudad de Xalapa-Enríquez, Ver., a los quince días del mes de mayo de mil novecientos sesenta y siete.- Lic. FERNANDO LOPEZ ARIAS.- Rúbrica.- El Secretario de Gobierno, Lic. ROMULO CAMPILLO REYNAUD.- Rúbrica.

TRANSITORIO (PRIMERA REFORMA)

ARTICULO UNICO.- La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la "Gaceta oficial" del Estado.

DADA en el Salón de Sesiones de la Honorable Legislatura, en la ciudad de Xalapa-Enríquez, Veracruz, a los quince días del mes de noviembre de mil novecientos setenta y siete.- Ing. ARMANDO RODAL MORALES.- Rúbrica.- Diputado Presidente.- ERASMO MEZA RIVERA.- Rúbrica.- Diputado Secretario.

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le de el debido cumplimiento.

Xalapa-Enríquez, Ver., 15 de noviembre de 1977.- Lic. RAFAEL HERNANDEZ OCHOA.- Rúbrica.- El Secretario de Gobierno, Lic. EMILIO GOMEZ VIVES.- Rúbrica.

TRANSITORIOS (SEGUNDA REFORMA)

Artículo 1o.- Esta Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en la "Gaceta oficial" del Estado.

Artículo 2o.- Se regulariza la situación de los Profesores con nombramiento de primeras letras, ya incorporados al régimen de la Ley de Pensiones del Estado, para el efecto de que satisfecho el requisito de hacer una aportación de un mínimo de 10 años, se les reconozca hasta 10 años de antigüedad anterior a la fecha del inicio de su aportación si efectivamente los hubieren laborado.

Artículo 3o.- Se incorporan al régimen de la Ley de que se trata, a los jefes, clases y tropa de la dirección General de Seguridad Pública y los jefes, clases y agentes de la Dirección General de Tránsito del Estado, quedando condicionada su inclusión a las siguientes circunstancias:

a).- Si dicho personal cotiza un mínimo de 10 años, permitirá reconocerles hasta 10 años de antigüedad anterior a la fecha del inicio de su cotización si efectivamente los hubieren laborado, para que estén en posibilidad de obtener los beneficios de la fracción I a V del artículo 2º de esta Ley.

b).- Que durante los 3 años siguientes a su incorporación no se les efectúen préstamos a corto plazo, con el objeto de que se pueda crear el Fondo necesario para obtener todas las prestaciones de Ley.

DADA en el Salón de Sesiones de la Honorable Legislatura del Estado, en la ciudad de Xalapa, su capital, a los seis días del mes de diciembre de mil novecientos setenta y nueve.- RAFAEL HERRERA RICAÑO, Diputado Presidente.- MANUEL PEREZ BONILLA, Diputado Secretario.- Rúbricas.

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le de el debido cumplimiento.

Xalapa-Enríquez, Ver., a 6 de Diciembre de 1979.- El Gobernador Constitucional del Estado, Lic. RAFAEL HERNANDEZ OCHOA.- Rúbrica.- El Secretario de Gobierno, Lic. EMILIO GOMEZ VIVES.- Rúbrica.